



Arizona contra Obama

FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR

Director del Observatorio de la Migración.

La recientemente aprobada ley SB1070 en Arizona ha detonado el inicio de la ofensiva republicana en contra del presidente Obama y el Partido Demócrata con miras a las elecciones intermedias en noviembre de este año, y con un propósito de mediano plazo: evitar la reelección de Obama, con base en un sabotaje constante de todas sus iniciativas.

El Partido Republicano ha decidido que uno de los temas centrales de su estrategia electoral en estas elecciones sea el de la inmigración ilegal, de acuerdo con un cálculo ponderado que considera la existencia de una mayoría de estadounidenses que se oponen a la inmigración ilegal, y que la pérdida del voto latino tiene un impacto menor en el resultado final.

La estrategia republicana está bien pensada, pues los temas de seguridad interna –cultivados intensamente durante los ocho años de la administración de Bush– y de legalidad, tan profundamente arraigados en el espíritu estadounidense, adicionados por el temor a la pérdida de la identidad cultural y de la hegemonía angloparlante que subyace en las mentes de los grupos más conservadores, hacen una combinación muy explosiva en el ánimo electoral de una importante mayoría.

Ejemplo de ello es que las encuestas señalan que más de 60% de la población de Estados Unidos aprueba la ley SB1070. Curiosamente estas mismas encuestas indican que 57% de los encuestados considera que debe darse una oportunidad en la ley para regularizar la situación migratoria de los inmigrantes indocumentados en el país.

Sin embargo, la aceptación de esta ley por parte del público estadounidense es más bien un fenómeno de percepción que de conocimiento a detalle del contenido. Ante el cuestionamiento de si esta ley puede atentar en contra de los derechos humanos una mayoría se pronunció afirmativamente, lo que bien muestra la insatisfacción de la población de Estados Unidos ante el problema de la inmigración ilegal y la incapacidad del gobier-

no federal para controlarla, por lo que consideran necesario que las autoridades estatales y locales tomen cartas en el asunto.

No obstante, como tantos otros problemas creados y heredados en el ejercicio de los ocho años de administración republicana, como las guerras en Irak y Afganistán, el colapso de las finanzas y el consecuente desempleo, el fenómeno de la inmigración ilegal creció al amparo de autoridades, empresarios e intereses particulares, y ahora se utiliza como arma electoral en contra del presidente Obama como si fuera el causante original de estos problemas.

Con sofismas, los grupos conservadores atrás de la ofensiva republicana resaltan que se apliquen primero las políticas de seguridad en la frontera, antes que una reforma migratoria integral que permita la regularización de los más de once millones de personas indocumentadas en el país, y el establecimiento de un sistema de cuotas de inmigración acorde con las necesidades laborales de Estados Unidos.

Esta condición encierra una trampa, ya que el aseguramiento de la frontera es una meta elusiva que no tiene parámetros claros de medición, y por lo pronto pospone indefinidamente la aprobación de una reforma migratoria en el corto plazo –uno de los objetivos de estos grupos–, pero al mismo tiempo, coloca al presidente Obama en la posición de incumplir una de sus promesas de campaña, haciéndolo ver mal ante el electorado latino, una de las piezas clave en el triunfo de las elecciones de 2007.

Este planteamiento tiende supuestamente a evitar el ingreso de nuevos inmigrantes ilegales, pero ignora a los millones de inmigrantes indocumentados que residen actualmente en el país, que aunque los republicanos abiertamente proclaman su expulsión, en el fondo están conscientes de la imposibilidad práctica de deportarlos. Prueba de ello es que no lo hicieron cuando se encontraban en el poder en la administración del presidente Bush.

Para reforzar la defensa de la ley SB1070, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha pretendido



criminalizar la inmigración indocumentada declarando que esos inmigrantes transportan narcóticos. Si bien se han dado casos en que los inmigrantes ilegales son obligados por los traficantes de personas a llevar consigo droga, como parte del pago de su traslado a Estados Unidos, ésta no es una situación generalizada, pero se evidencia con este señalamiento la mala fe de la gobernadora Brewer para influir en contra a la opinión pública.

Igualmente el discurso de los grupos conservadores del Partido Republicano intenta presentar a los inmigrantes en general como individuos que le quitan el trabajo a los estadounidenses desempleados en una época de grave crisis económica en la que se registra una tasa de desempleo de 9.4% para junio de 2010, sin especificar que los inmigrantes –legales e ilegales– ocupan empleos que los estadounidenses nativos no están dispuestos a realizar: en la agricultura, en la minería, en la industria, en el transporte y en los servicios.

Para demostrar lo contrario, la United Farm Workers of America ha lanzado una campaña “Take Our Jobs”, invitando a aquellos estadounidenses desempleados a inscribirse en las agencias estatales para laborar en los campos agrícolas. No ha habido muchos candidatos.

Ante esta situación el presidente Obama ha reaccionado con cautela, consciente de que esta ofensiva es parte de la estrategia política del Partido Republicano con vistas a la elección de noviembre próximo. En sus primeras declaraciones manifestó su desacuerdo con dicha ley por considerarla mal orientada, y mencionó que el Departamento de Justicia estudiaría la constitucionalidad de la misma.

Después se reunió con dirigentes de asociaciones hispanas y con líderes de protección de derechos humanos para definir una estrategia. Recientemente pronunció un discurso en la Universidad Americana de Washington, en el que resumió su posición en cuanto a la necesidad de realizar una reforma integral a las leyes de inmigración de Estados Unidos, exhortando al Partido Republicano a colaborar en la presentación de una propuesta bipartidista.

En su discurso, Obama destacó hábilmente las razones para reformar el disfuncional sistema de inmigración de Estados Unidos, y al mismo tiempo señaló la imposibilidad de hacerlo sin el apoyo

republicano. De esta manera se presenta como un propulsor de la reforma, pero traslada la responsabilidad de su no aprobación a los republicanos.

El Partido Republicano reaccionó al discurso rechazando estas implicaciones y reiterando su posición respecto al aseguramiento de la frontera, señalando adicionalmente que el discurso del presidente no propiciaba el acercamiento al trabajo bipartidista. Palabras huecas cuando sistemáticamente se han opuesto a todas las políticas del presidente Obama en una posición obstruccionista.

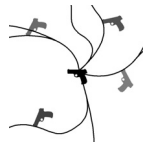
La oposición cerrada de los republicanos se hace evidente en cuanto que los once senadores republicanos que votaron a favor del proyecto de reforma migratoria integral presentada por el presidente Bush en 2007, en la actualidad se oponen a ella, incluyendo al senador John McCain, uno de los autores, junto con el finado senador Edward Kennedy, de la propuesta de reforma migratoria integral presentada en 2006.

El Departamento de Justicia presentó el 6 de julio una demanda¹ en contra de la ley de Arizona estableciendo que es inconstitucional con base en la “cláusula de supremacía” de la Constitución y de las leyes federales sobre las estatales, y que es responsabilidad federal la aplicación de las leyes de inmigración.

Es posible que el presidente Obama se espere a actuar al final, una vez que las demandas presentadas por los particulares y las organizaciones de derechos civiles, así como el Departamento de Justicia, hayan sido resueltas. Es probable que astutamente no entre en la pelea en donde sus enemigos han elegido el campo de batalla, y deje que otras instancias se adelanten en el debate, tal como lo hizo en el caso de la reforma de salud.

Existen elementos en la ley SB1070 que seguramente una corte federal declarará inconstitucional, y esto lo tienen muy claro los republicanos, pero la intención indiscutible de esta ley es detonar un sentimiento antiinmigrante en la población estadounidense.

El tema de la inmigración es altamente emocional, divisivo y explosivo. En el pasado se han utilizado exitosamente estrategias electorales tendientes a despertar los temores de la población ante enemigos externos. Tal es el caso de la guerra fría y del pe-





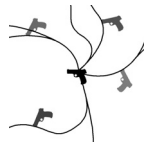
ligro atómico soviético, del comunismo, del terrorismo internacional y el extremismo islámico.

Por lo pronto, la juez Susan R. Bolton de la corte federal del distrito de Arizona fijó para el 15 de julio la audiencia para la primera demanda en contra de la ley SB1070, y dio entrada a los argumentos expuestos en el recurso interpuesto por México como Amigo de la Corte (*Amicus Curiae*) en contra de dicha ley.

No cabe duda que la SB1070 es una provocación para establecer el tema de la inmigración ilegal como uno de los temas centrales de la agenda en las elecciones de noviembre y procurar, al mismo tiempo, un efecto reproductivo en otros estados y localidades en un abierto reto a las autoridades federales. La oportuna presentación de la demanda del Departamento de Justicia y la declaración de inconstitucionalidad evitará la proliferación de leyes semejantes en otras entidades.

Al hacer un balance general se puede afirmar que no existen las condiciones para la aprobación de una reforma migratoria integral antes de las elecciones de noviembre, y dependiendo del resultado de la elección, podrán darse en un sentido o en el otro.

De lo que sí podemos estar ciertos es de que el debate migratorio va a tener efectos importantes en la situación de los inmigrantes en general, y de los indocumentados en particular, ya que el presidente Obama se verá obligado, por las presiones republicanas, a endurecer la aplicación de las leyes migratorias para no aparecer como poco firme en el ejercicio de la ley. Ya habíamos destacado el incremento en 50% de las deportaciones en los dos últimos años y el aumento de los procesos judiciales en contra de los inmigrantes indocumentados por encima de los procesos criminales. El envío de 1 200 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, el incremento de mil agentes de la Patrulla Fronteriza y de 160 de Aduanas, dos aeronaves no tripuladas que se unen a las tres existentes, así como el incremento en 600 millones de dólares del presupuesto para la vigilancia en la frontera, son una muestra de ello.



A esto la gobernadora Brewer, de Arizona, el gobernador Perry, de Texas, y los senadores Jon Kyl y John McCain han declarado que estas medidas son insuficientes, corroborando que la estrategia republicana siempre pondrá la meta más lejana, no importando lo que se haga, para de esta manera posponer una reforma migratoria.

La ley SB1070 del estado de Arizona es la punta de lanza de la ofensiva republicana en contra del presidente Obama para triunfar en las elecciones intermedias, y debilitarlo con miras a la elección presidencial en 2012. Sin poder anticipar el resultado, es muy probable que no logren su objetivo. Obama ha demostrado ser un estratega muy hábil, y viniendo de atrás logró alcanzar la presidencia en 2008, y en menos de dos años sacó adelante las re-

formas financiera y de salud. Seguramente no alcanzará a pasar la reforma a las leyes de inmigración en este año, y dependiendo de las circunstancias y del resultado de las elecciones intermedias, quizá lo logre en lo que resta de su administración.

Algunos expertos plantean que una posición realista consistiría en aprobar elementos parciales de la reforma migratoria, tales como la Dream Act relativa a la obtención de la ciudadanía para la juventud indocumentada mediante la obtención de un grado académico superior en seis años, o su enlistamiento en las fuerzas armadas en dos años, al igual que la Ag Jobs Act para el establecimiento de permisos de trabajo temporales para jornaleros agrícolas. No creo que ésta vaya a ser la solución, y el compromiso de Obama es lograr una reforma de las leyes de inmigración que permita regularizar la situación migratoria de los millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.

En este juego de poderes, desafortunadamente, los inmigrantes indocumentados serán rehenes de esta lucha y sufrirán las consecuencias, en tanto se decide la reforma. Esto podrá tomar años, pero al final se dará.

Lástima de tanto tiempo perdido.

¹ United States vs. Arizona.